Poder militar y desarrollo político

CARACTER nacional de la intervención, evidencia sobre su necesidad, excepcionalidad, provisionalidad, son las condiciones que, según exponíamos en nuestro comentario anterior, debe reunir la actuación de las Fuerzas Armadas en aquellos casos, ciertamente contadísimos, auténticos casos-límite, en que una nación tiene que recurrir a ellas para que la saquen del caos; pero esto no obsta, naturalmente, a que dicha actuación constituya una anomalía política, y por esto, donde se produce, denuncia una sociedad que funciona defectuosamente y cuyos males sólo momentáneamente pueden aliviarse con el remedio de urgencia.

Debemos puntualizar: función política la tiene el Ejército en todas partes, incluso en naciones con una larga tradición civil, pero donde las nuevas modalidades de la guerra, desbordando los cauces de los conflictos con formas inéditas provistas de una fuerte carga ideológica, le obligan a considerar problemas eminentemente políticos que están estrechamente vinculados con su más directo cometido; recuérdese cómo, en la vecina Francia, la decisión fundamental en la crisis de mayo de 1968 no la tomó el presidente De Gaulle sin la previa y discreta consulta a las Fuerzas Armadas. Pero una cosa es esa función de reserva política, podríamos decir, en que basta con la presencia sin que sea indispensable pasar a más, y otra cosa es que haya necesidad de pasar a más.

NO son declaraciones más o menos platónicas las que podrán evitarlo, sino, como hemos anticipado, la conciencia del Ejército, su sentido profesional, su educación cívica y la madurez política del país. Prohibir que se recurra a las Fuerzas Armadas en casos extremos sería tan pueril como prohibir al enfermo que busque el remedio donde piensa que puede encontrarlo. Lo que hace falta es que no tenga que pedirselo a nadie porque las instituciones políticas funcionen bien.

Balmes, que no era ningún entusiasta del Ejército, reconocía que no es que el poder civil fuera flaco porque el militar fuese fuerte, sino que el poder militar era fuerte porque el poder civil era flaco. A la misma conclusión llega, un siglo después, el historiador norteamericano Payne en su estudio sobre los militares y la política española durante siglo y medio: "El Ejército se convirtió en un factor fundamental de la política, no tanto porque los militares fuesen ambiciosos o voraces, sino porque la sociedad política española se había quebrado." Digamos de paso que esa es la explicación del papel directivo del Ejército en sociedades como las africanas, que no es que se hayan quebrado, sino que acaban de nacer.

¿HA evolucionado nuestro país lo suficiente para que la presencia de las Fuerzas Armadas tenga la función política, poco más que simbólica, propia de sociedades cuya madurez hace inconcebible cualquier alteración violenta de su funcionamiento normal? La dura experiencia de nuestra guerra, la variación de las condiciones sociológicas del país, la elevación del nivel de vida, la desproletarización de grandes masas de población, la aparición de una nueva clase media naturalmente conservadora, el debilitamiento de los antiguos motivos de tensión y posiblemente un mayor sentido de la convivencia, nos inclinan hacia la respuesta afirmativa. Es también la del procurador señor Esperabé en el ruego al Gobierno que venimos comentando. Asimismo coincidimos con él en opinar que hace falta proporcionar a esta sociedad una vestidura política que esté a la medida de su desarrollo, mediante el cumplimiento de lo que exigen las Leyes Fundamentales. Se trata de dar voz, con la mayor extensión y autenticidad posibles, a esa inmensa mayoría del país que encarna el sentido común, evitando el peligro de los extremismos, que sólo tienen fuerza en la medida en que esa mayoría carece de ella, y son por su radicalismo los que pueden hacer inevitables soluciones de emergencia que nadie debe desear; y que, menos que nadie, desea el propio Ejército.

El señor Esperabé pide una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; como hemos dicho, nos parece necesaria; pero las preocupaciones que dicho procurador expone sobre el magno problema de la función política del Ejército rebasan, a nuestro juicio, el marco y las posibilidades de ese proyecto de ley y de otro cualquiera. Es el desarrollo completo de nuestro sistema constitucional el que debe dar la solución. El Ejército de la Ley Orgánica es, según lo entendemos nosotros, un Ejército eminentemente profesional, alerta para respaldar cuanto exija la paz nacional, pero no dispuesto a asumir el primer plano más que en situaciones límite, y aun entonces no para hacer política, sino con la finalidad de mantener las condiciones indispensables para que se pueda hacer política sin que la política mate a la nación. Y en una sociedad donde la autoridad esté bien ejercida por sus órganos naturales y el país se encuentre debidamente representada ante sus gobernantes, podemos predecir que esas situaciones extremas no se producirán.